

Santiago, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En esta causa RUC N° 2100838220-1 y RIT N° 282-2022, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, por sentencia de veintisiete de febrero pasado condenó a Maximiliano Joglar Catalán Castro como autor del delito consumado de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 4 en relación con el artículo 1 de la Ley N°20.000, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de un tercio de unidad tributaria mensual y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, cometido en la comuna de Puente Alto, el día 15 de septiembre de 2021. La sanción deberá cumplirse en forma efectiva.

En contra de esa decisión, la defensa del encausado interpuso recurso de nulidad, el que se conoció en la audiencia pública de veintiocho de septiembre pasado, como da cuenta el acta que se levantó con la misma fecha.

Considerando:

Primero: Que el recurso de nulidad deducido se funda, de manera principal, en la causal contemplada en el artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal, esto es, cuando en el pronunciamiento del fallo se hubiere hecho una errónea aplicación del derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, acusando la infracción de los artículos 1 del Código Penal y 43 de la Ley N° 20.000.

Señala que el informe que regula el mencionado artículo 43 no estableció la pureza o concentración de la cannabis sativa encontrada en poder



del imputado, señalándose sólo la presencia del mencionado estupefaciente, sin que se haya determinado si esa sustancia tiene o no la idoneidad para producir graves efectos tóxicos o daños considerables en la salud pública, razón por lo cual no puede concluirse que los hechos que se tuvieron por probados puedan ser merecedores del castigo penal a título de microtráfico del artículo 4 de la Ley N° 20.000, debiendo haberse dictado sentencia absolutoria en favor del encartado.

Concluye solicitando se acoja la causal principal, se anule la sentencia condenatoria y se dicte, sin nueva audiencia, pero separadamente, una sentencia de reemplazo que absuelva a su representado del delito previsto en el artículo 4 en relación al 1, ambos de la Ley N° 20.000.

Segundo: Que el motivo de invalidación alegado de manera principal por la defensa, de conformidad al artículo 376 inciso tercero del Código Procesal Penal, ha sido confiado excepcionalmente al conocimiento de esta Corte Suprema en el evento que, con ocasión de dicha causal, se invoquen distintas interpretaciones sostenidas en diversos fallos emanados de los tribunales superiores sobre la cuestión de derecho principal planteada en el recurso, esto es, la incidencia de la ausencia del informe de pureza en la decisión de lo discutido, lo que en la especie se demuestra con los pronunciamientos que se acompañaron a la presentación en análisis.

Tercero: Que los hechos establecidos por la sentencia recurrida en su motivo décimo primero, son los siguientes:

“Que el día 15 de septiembre de 2021, a las 13:30 horas aproximadamente, al interior del Centro de Detención Preventiva Puente Alto, ubicado en José Manuel Irrarrázaval N° 0991, comuna de Puente Alto, el acusado MAXIMILIANO JOGLAR CATALÁN CASTRO, tenía, poseía y



transportaba al interior de una encomienda, sin la competente autorización, veinte cigarrillos contenedores de marihuana, con un peso bruto de 13,8 gramos.”

Los hechos antes descritos fueron calificados jurídicamente como constitutivos del delito de tráfico de sustancias estupefacientes en pequeñas cantidades, previsto y sancionado en los artículos 1 y 4 de la Ley N° 20.000, correspondiéndole al acusado la calidad de autor, al haber intervenido en su ejecución de una manera inmediata y directa, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal.

Cuarto: Que la conducta tipificada en el artículo 4° de la Ley N° 20.000, en relación a su artículo 1°, requiere que el objeto material lo constituyan *“pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o psíquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1°, esto es, capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”*, que se describen y clasifican en los artículos 1° y 2° del Reglamento de la Ley N° 20.000.

Quinto: Que la disposición cuya configuración se ha tenido por probada no exige determinación de la pureza de la sustancia traficada, ya que respecto de ésta el legislador sólo se refiere a *“pequeña cantidad”*, concepto regulativo cuyo contenido queda entregado a los jueces de la instancia.

Así las cosas, resulta inconcuso que lo incautado en este caso, aun desconociéndose su concentración, fuese cannabis sativa, sustancia capaz de producir graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Sexto: Que, por otra parte, este tribunal tiene presente que es la propia Ley N° 20.000, en su artículo 63, la que ha establecido que será un reglamento



el que señale las sustancias a que se refiere el artículo 1° del citado cuerpo legal. A tal efecto, el D.S. 867 del año 2008, que reemplazó al D.S. 565 del año 1995, clasifica las sustancias estupefacientes o sicotrópicas productoras de dependencia física o síquica en dos listas (artículos 1° y 2°), dependiendo de si son capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud o no, haciendo expresa mención a lo preceptuado en el inciso primero del artículo 1° de la Ley N° 20.000, y la cannabis sativa, se encuentra contemplada en el artículo 1° del citado Reglamento, entre aquellas drogas o sustancias estupefacientes o sicotrópicas que son capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud.

Séptimo: Que, asimismo, resulta pertinente tener en consideración que el protocolo de análisis a que alude el artículo 43 de la Ley N° 20.000 -y respecto del cual se vale el recurso para sostener que se está ante una conducta carente de antijuridicidad material- no altera lo que antes se ha dicho, desde que éste no está destinado a cumplir el rol que el recurso pretende, y prueba de ello es que se encuentra regulado dentro del título referido a la competencia del Ministerio Público y, específicamente, dentro del párrafo sobre *“medidas para asegurar el mejor resultado de la investigación”*, de manera que los elementos que allí se enuncian y sobre los cuales ha de pronunciarse el Servicio de Salud -peso, cantidad, composición y grado de pureza- le permitirán tener al juez un mejor conocimiento de las características de la droga incautada, pero en ningún caso servirán para concluir que dadas tales características, la sustancia en cuestión, cannabis sativa en este caso, deja de ser tal.

Por el contrario, el informe que indique el grado de pureza o concentración de la droga constituirá una herramienta útil en la medida que el



imputado pretenda exculparse alegando que aquella está destinada a su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, puesto que para el análisis de la concurrencia de esta causal de justificación los sentenciadores deberán atender a la calidad o pureza del estupefaciente poseído, transportado, guardado o portado, ya que dicho elemento es crucial para determinar si es posible racionalmente suponer que aquél está destinado a tales fines, siempre que previamente se argumente dicho consumo como defensa.

De este modo, el elemento que en el informe se echa de menos tiene relevancia a la hora de decidir si se está en presencia de un consumidor o de un traficante, criterio que contempla el inciso final del artículo 4° de la Ley N° 20.000, incorporándolo como un elemento de juicio más y que, en el caso de estos antecedentes, no fue materia de discusión.

Octavo: Que, como consecuencia de lo expuesto precedentemente, la determinación del objeto material del ilícito se satisface con un protocolo de análisis que contenga las restantes menciones del artículo 43 de la Ley N° 20.000, como ocurre en el caso de estos antecedentes, cuestión que lleva a concluir que no ha existido error de derecho en el pronunciamiento de la sentencia a propósito de esta sustancia, por lo que la causal de nulidad, debe ser desestimada.

Noveno: Que, como primera causal subsidiaria, se esgrime la contemplada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 342 letra c) y 297 del mismo cuerpo legal, por cuanto el tribunal mediante una valoración apartada de los parámetros que exigen las últimas dos normas citadas, arriba a una convicción de participación que no



corresponde con la conclusión que se habría obtenido de una racional e íntegra ponderación de la prueba rendida.

Señala que el acusado declaró que accedió a llevar una encomienda a cambio de una suma de dinero por parte de una vecina de nombre Marcela, que no podía ir al centro penitenciario, porque habría dado a luz recientemente, ignorando las intenciones que ella tenía de introducir droga en el penal. Aunque siempre había escuchado que no debía prestarse para eso, no pensó que en la primera encomienda pasara algo así. Agrega que él conocía a la señora y que se veía una persona de casa.

En razón de esta versión, la defensa solicitó la absolución por falta de dolo, concurriendo un error de tipo por falta de conocimiento concreto que tenía el imputado de lo que realmente estaba portando o trasladando.

Expresa que el tribunal, en el razonamiento esgrimido para rechazar la alegación de error de tipo no se hace cargo de toda la prueba producida en juicio, infringiendo de esta manera el inciso segundo del artículo 297 del Código Procesal Penal.

Especifica que el imputado manifestó desconocer que existía la sustancia en el interior de la cajetilla de cigarrillos, haciendo presente que se encontraba debidamente sellada, elementos que hacen creíble su versión de los hechos; sin embargo, el tribunal los omitió completamente.

Arguye que el funcionario de Gendarmería Walter Cofré indicó que al revisar la encomienda, tuvo que abrir la cajetilla, acercársela a la nariz, olfatearla y recién ahí se percató de un olor extraño, sin referir que se trataba de marihuana, de lo que se concluye que no bastaba estar ante la cajetilla, para darse cuenta que contenía dicha sustancia estupefaciente, sin embargo,

el tribunal no reparó en dicha circunstancia, porque no valoró en su totalidad la prueba rendida.

Por lo expuesto, pide se declare la nulidad del juicio y de la sentencia, determinado el estado en que debe quedar el procedimiento, ordenando la remisión de los autos al tribunal no inhabilitado, para que disponga la realización de un nuevo juicio oral.

Décimo: Que, respecto a este primer motivo absoluto de nulidad, esta Corte ya ha manifestado que toda sentencia criminal debe razonar y exponer los fundamentos en que se apoya, justificar la decisión adoptada, fijar los hechos y establecer el derecho aplicable.

El cumplimiento de la obligación de motivación de la decisión significa elaborar una justificación específica de la opción consistente en tener algunos hechos como probados, sobre la base de los elementos de prueba obtenidos en la litis, con las garantías inherentes al juicio oral. Tal deber apunta no sólo a permitir la comprensión de la decisión, sino además a garantizar la actuación racional en el terreno de la determinación de las premisas fácticas del fallo (entre otras, SCS N°s 14.491-2021, de 13 de abril de 2021; y, 92.094-2020, de 14 de septiembre de 2020).

La satisfacción de esta carga posibilita la fiscalización de la actividad jurisdiccional por los tribunales superiores mediante el ejercicio de los recursos procesales.

Si el tribunal explica las razones de su resolución es posible controlar si efectivamente la actividad judicial se ha desarrollado dentro de los parámetros de la lógica-racional y la legalidad o si, por el contrario, es el resultado de la arbitrariedad. Por ello, en nuestro ordenamiento jurídico las decisiones judiciales no deben resultar de meros actos de voluntad o ser fruto de simples



impresiones de los jueces, sino que deben ser el corolario de la estimación racional de las probanzas, exteriorizada como una explicación igualmente racional sobre las razones de la decisión de una determinada manera, y no de otra, explicación que deberá ser comprensible por cualquier tercero, mediante el uso de la razón.

Tal comprensión se ajusta a la concepción racionalista o cognoscitivista, que entiende la valoración de la prueba como el proceso de determinación de la verdad o falsedad de las proposiciones sobre hechos conforme a las relaciones inferenciales que existen entre ellas y las pruebas disponibles (Cortés-Monroy, Jorge. La “valoración negativa” como exclusión de la prueba ilícita en el juicio oral”, en Revista Ius et Praxis, vol. 24, N° 1, 2018, p. 663).

Undécimo: Que, al mismo tiempo, la fijación de los hechos y circunstancias que se tuvieran por probadas, favorables o desfavorables al acusado, debe ir precedida de la debida valoración que impone el artículo 297 del Código instrumental. Atendiendo a esta norma, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba producida, incluso la desestimada, con señalamiento de los medios de prueba, único o plural, por los cuales se dieron por probados los hechos y circunstancias atinentes a la litis.

Duodécimo: Que, tal exigencia de fundamentación ha sido debidamente satisfecha por la sentencia que se revisa.

En efecto, el fallo extrae conclusiones del análisis de la prueba, como resultado de un proceso valorativo de cada uno de los elementos de convicción rendidos, tanto respecto de los hechos objetivos integrantes del tipo penal atribuido como de la conducta desplegada por el acusado, así como se pronuncia desechando la teoría propuesta por la defensa en torno a la falta de dolo del encartado por el desconocimiento de la existencia de la cannabis



sativa en la cajetilla de cigarrillos que contenía la encomienda, conforme a lo expresado en los motivos noveno y décimo de la sentencia impugnada.

En las condiciones expresadas no puede catalogarse como carente de lógica y comprensión el fallo impugnado, como demanda el artículo 342 del Código Procesal Penal, desde que la sentencia entrega los basamentos que conducen a la decisión alcanzada respecto del delito pesquisado, fundado en el análisis singular y conjunto de las probanzas producidas, lo cual surge de la lectura de los considerandos del fallo. Tales consideraciones conducen a una conclusión unívoca, como expresa la sentencia, cuya inteligencia se justifica en virtud de los argumentos explicitados en ella y que no han sido desvirtuados por el recurso, por lo que sólo resta concluir que las impugnaciones formuladas por la defensa dan cuenta de una mera discrepancia con la conclusión para desestimar la ausencia de dolo en la conducta desplegada por el acusado, juicio que el tribunal sustentó suficientemente como se advierte de los basamentos mencionados de la sentencia impugnada. Es por ello, que las denuncias relativas a una presunta falencia en el razonamiento no será admitida.

Décimo tercero: Que como segunda causal subsidiaria, el recurso invoca la establecida en la letra b) del artículo 373 del Código Procesal Penal, al quebrantarse los artículos 1 y 2 del Código Penal, en relación al artículo 4° de la Ley 20.000, dado que según los propios hechos y circunstancias tenidas por acreditadas por el tribunal, ellas dan cuenta más bien de una culpa con representación, y no así de un dolo eventual.

Señala que el tribunal da por acreditado un dolo eventual, al indicar que *“...se desprende la representación que este hace de los hechos, lo cual*



permite a este tribunal tener por acreditado la existencia de dolo por parte del acusado” (sic).

Sin embargo, el tribunal pasa por alto que para ello -incluso en el dolo eventual- es necesario que concurra también el elemento volitivo, esto es, que a pesar de dicha representación haya decidido igualmente actuar, que habría aceptado en su voluntad esa posibilidad, lo que no se argumentó en la sentencia, y que tiene importancia para distinguir entre el dolo eventual de la culpa con representación.

Expresa que, de los dichos del imputado se puede desprender que si se hubiera representado que se trataba de marihuana no habría actuado. De esta manera, el acusado da cuenta de la nula intención de querer ingresar droga al establecimiento penal.

Arguye que si el acusado se lo representó como una posibilidad, es claro que confió en que ello no sucedería, desechándola por tratarse de la primera encomienda.

Finaliza solicitando se acoja la presente causal de nulidad y, en consecuencia, se anule la sentencia condenatoria y se dicte sin nueva audiencia, pero separadamente, sentencia de remplazo que absuelva a su representado.

Décimo cuarto: Que el recurrente en lo referido a esta segunda causal subsidiaria, la ha hecho consistir en que no se acreditó el dolo eventual con que habría actuado el imputado, pues no se probó que el imputado haya aceptado el resultado típico, como tampoco la sentencia argumentó la concurrencia del mismo, atendida la declaración efectuada por el acusado en el juicio oral, por lo que se trataría de una conducta realizada con culpa con representación.



De lo expresado, aparece que lo que se cuestiona por la defensa es la insuficiencia de los medios de prueba para establecer la aceptación de la realización del resultado típico de la conducta por parte del encartado y la insuficiencia de razonamientos del tribunal para tener por acreditada la existencia del dolo, especialmente respecto a la voluntad de concreción del tipo objetivo, resultando evidente que tal pretensión no dice relación alguna con la aplicación errónea de los artículos 1 y 2 del Código Penal y el artículo 4 de la Ley N° 20.000, sino que más bien alude a la valoración de la prueba que los jueces del grado -en uso de las facultades que privativamente le confiere el legislador- dieron a los hechos que podrían o no configurar el delito en cuestión, así como la responsabilidad del acusado, lo que por cierto excede de los márgenes de la causal en comento.

En virtud de lo razonado, no se configura el error de derecho esgrimido por la defensa, por lo que debe desestimarse la causal en estudio.

Décimo quinto: Que una tercera causal subsidiaria se funda nuevamente en el artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, pues se quebrantaron los artículos 1 y 4 de la Ley N° 20.000 y 1 y 2 del Código Penal.

Señala que no existe la afectación a la salud pública que protege el artículo 4° de la ley 20.000 y, por ende, no existe antijuridicidad material en la conducta, pues el tribunal al tener por acreditado que el acusado se dirigió al establecimiento penitenciario pretendiendo ingresar cannabis para un interno en particular -tal como lo indica la sentencia-, entonces no se puede sostener que se buscó con ello afectar la salud de un número relevante de personas, si no únicamente la de un interno. Por lo demás, la baja dosis de esta cannabis, 13,8 gramos brutos, no permiten establecer lo contrario.



Concluye pidiendo se acoja la presente causal de nulidad y, en consecuencia, se anule la sentencia condenatoria y se dicte, sin nueva audiencia, pero separadamente, sentencia de remplazo que absuelva a su representado.

Décimo sexto: Que, en cuanto a esta tercera causal subsidiaria del recurso, debe considerarse que la conducta tipificada en el artículo 4 de la Ley N° 20.000 sanciona -en lo que interesa- al *“que, sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas, productoras de dependencia física o síquica, o de materias primas que sirvan para obtenerlas, sea que se trate de las indicadas en los incisos primero o segundo del artículo 1º, será castigado con presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a cuarenta unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo”*. Agregando en el inciso segundo que *“en igual pena incurrirá el que adquiera, transfiera, suministre o facilite a cualquier título pequeñas cantidades de estas sustancias, drogas o materias primas, con el objetivo de que sean consumidas o usadas por otro”*.

A su turno, el artículo 1º de la Ley N° 20.000 establece que las sustancias a las que se refiere son las *“capaces de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud”*, y que además, no se cuente con *“la debida autorización”*.

Décimo séptimo: Que, según aparece de los hechos establecidos en el fallo no resulta posible razonar como lo hace el recurso en esta causal subsidiaria, en el sentido que la conducta desplegada por el acusado resulte atípica y, por consiguiente, impune, en atención a que la droga estaba



destinada a una persona determinada, por lo que no afectaba a una gran cantidad de individuos ni estaba destinada a su distribución incontrolada, considerando la exigua cantidad de cannabis sativa (13,8 gramos brutos), pues se estableció que la droga estaba en la encomienda que entregó el acusado en el centro penitenciario; que estaba destinada a otra persona, un interno del establecimiento penitenciario, y que por el informe pericial se acreditó que se trataba de la mencionada sustancia, todo lo cual amerita la sanción del hecho tal cual lo hacen los jueces que dictaron el fallo recurrido, por cuanto el imputado portaba la droga, la ingresó oculta en una encomienda y estaba destinada para que fuera consumida por al menos un tercero, sin contar con la autorización de la autoridad competente, por lo que concurren en la especie los presupuestos del tipo penal.

En virtud de lo expresado, esta causal también debe ser desestimada.

Décimo octavo: Que, como cuarta causal subsidiaria, se ha esgrimido por la defensa del imputado también la contemplada en el artículo 373 b) del Código Procesal Penal, al haberse aplicado la circunstancia prevista en el artículo 19 letra h) de la Ley N° 20.000, por cuanto no concurren en la especie los supuestos de esa circunstancia, pues se trata del sector de encomiendas del centro penitenciario de Puente Alto, lugar que en palabras del imputado, era una especie de “antejardín” del mismo, cuyas instalaciones son independientes del recinto de torres donde circulan los reclusos, con accesos diferenciados y que incluso, en concreto, no era un día de visitas. Además, el imputado no pretendía ingresar al penal con esta encomienda, sino que dejarla para su revisión y envío al interior del establecimiento.

Agrega que el propio funcionario de Gendarmería Walter Cofré señala que se trata de un hall ubicado a cuatro metros de la puerta de acceso al penal,



con entrada independiente de las torres de los internos, debiendo ingresar la encomienda el personal de esa institución.

Por ello, solicita se anule la sentencia parcialmente en lo que dice relación con la aplicación de la agravante del artículo 19 letra h) de la ley 20.000, y se dicte sin nueva audiencia, pero de forma separada, sentencia de remplazo que condene a su representado a la pena de quinientos cuarenta y un días y se mantenga la multa, que se tenga igualmente por cumplida, y a la accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena.

Décimo noveno: Que, en lo referido a esta última causal subsidiaria, por la que se postula la errónea aplicación al caso en análisis de la circunstancia contemplada en el artículo 19 letra h) de la Ley 20.000, que impone el aumento de la pena en un grado si *“el delito fue cometido en un centro hospitalario, asistencial, lugar de detención o reclusión, recinto militar o policial”*, es necesario recordar que de acuerdo a la historia del establecimiento de sus antecesoras (concretamente, en la discusión que sirvió de antecedente para la sustitución de la Ley 18.403), aparece que ella fue introducida atendida la necesidad de *“evitar el consumo de drogas por parte de los internos en los establecimientos carcelarios”* (Informe de la Comisión Especial del Problema de la Droga en Chile, boletín N° 653-07, Cámara de Diputados), siendo reproducida sin modificaciones en la Ley 19.366, adicionándose – a propósito de la dictación de la Ley 20.000- la referencia a los lugares *“de reclusión”* que se advierte en su redacción vigente, eliminando de su texto la referencia a *“sus inmediaciones”*, lo que restringe su aplicación a los delitos que se cometan en el interior del recinto penal.



Lo anterior, entonces, da cuenta del interés del legislador penal en evitar la comisión de los delitos que la Ley en comento contempla, en el interior de – entre otros- recintos penitenciarios, atendida la afectación de derechos esenciales que tales conductas acarrearán a personas que se encuentran en situación de privación de libertad. En efecto, la redacción del precepto discurre exclusivamente en que el delito se haya perpetrado dentro de un centro de detención, sin hacer distinción alguna.

Así las cosas, la distinción que el recurso formula respecto a que se trataba del antejardín del establecimiento porque las puertas de acceso a los pabellones donde se encuentran los internos, se ubican después de ese sector, aparece como artificial, toda vez que los hechos se producen al interior del recinto que se encuentra bajo la tutela de Gendarmería de Chile destinada a mantener personas privadas de libertad, como lo reconoce el propio recurrente al señalar que ese “antejardín” es parte del establecimiento, pero que está separado de la sección en donde se encuentran los reclusos.

Vigésimo: Que por lo expuesto, resulta evidente que la aplicación que los jueces del grado han hecho de la causal de agravación de pena contemplada en la letra h) del artículo 19 de la Ley N° 20.000 ha sido ajustada a derecho, ya que han considerado acertadamente que el ilícito se produjo en el interior del recinto penitenciario (considerando décimo cuarto), de manera que no se ha producido el error de derecho denunciado.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, a lo dispuesto en los artículos 373 letra b), 374 letra e) y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por la defensa del acusado Maximiliano Joglar Catalán Castro, contra la sentencia de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto y



contra el juicio oral que le antecedió en el proceso RUC N° 2100838220-1, y RIT N° 282-2022, los que en consecuencia no son nulos.

Se previene que, en cuanto a la causal del artículo 373, letra b), del Código Procesal Penal en lo que respecta a la pureza o destino de la sustancia objeto del recurso, el abogado integrante señor Eduardo Morales Robles concurre al fallo, teniendo además presente que el carácter de sustancia prohibida de la cannabis se encuentra establecida en la ley, de manera clara y precisa, siendo innecesario recurrir al Reglamento contenido en el Decreto 867, de 2008 y a las pruebas de pureza invocadas por el recurrente.

En efecto, el artículo 8° de la Ley N° 20.000 prohíbe, sin la debida autorización, sembrar, plantar, cultivar o cosechar “especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas”.

El empleo del adjetivo “otras”, entendida “para explicar la suma semejanza entre dos cosas o personas” (tercera acepción del Diccionario de la Real Academia), da a entender que la cannabis es una especie del género de aquellos vegetales productores de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, que son precisamente aquellos objetos de elaboración, fabricación, comercialización o preparación a que se refiere el artículo 1° de la Ley N° 20.000.

La ley, para los efectos de la configuración del injusto, sólo distingue entre pequeñas cantidades y las que no son tales, donde la pureza no se encuentra presente.

Redacción a cargo de la Ministra Sra. Letelier y de la prevención, su autor.

Regístrese y devuélvase.



Rol N° 34810-2023.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogado Integrante Eduardo Valentín Morales R. Santiago, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

